

Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales:

Diciembre 2020

Introducción

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promueve la consulta pública en relación al texto de la Carta de Derechos Digitales.

El pasado 15 de junio, se ha anunciado el comienzo del proceso de elaboración de la Carta de Derechos Digitales (de ahora en más, la “Carta”), a través de la constitución de un grupo de expertos y la apertura de una primera instancia de consulta pública a través de preguntas abiertas. A mediados de noviembre, se ha presentado una propuesta de Carta, que incorpora las contribuciones realizadas tanto por el grupo de expertos, así como las presentadas en el marco de la consulta pública anterior.

Consideramos positivo el desarrollo de instrumentos como esta Carta, en miras de establecer cuáles son los retos de aplicación e interpretación de los derechos en el entorno digital, así como un marco de referencia en términos de principios aplicables.

En línea con lo dispuesto en el apartado de la Carta sobre “Derechos y libertades en el entorno digital”, insistimos en que los derechos y libertades en el ámbito digital no deben considerarse en forma independiente y se deben instrumentalizar al mismo nivel y responder a los mismos criterios éticos que otros espacios en donde la ciudadanía se desarrolla e interacciona. Lo anterior se plantea teniendo como foco la transparencia, participación en el diálogo público, revisión constante de procesos, innovación pública y “compliance” normativo.

1. Comentario general en relación a los derechos contenido en la Carta

Si bien se entiende el carácter descriptivo y prescriptivo de la Carta, corresponde se analice cómo sería la interacción entre los derechos que la Carta contiene y aquellos que ya cuentan con regulación aprobada en el ordenamiento jurídico español, en miras del desarrollo de regulación que concrete las especificidades necesarias. También para analizar si corresponde establecer períodos de adaptación o intermedios entre la actual situación y una futura con regulación específica.

Al no tener carácter normativo, se entiende que la Carta puede considerarse un elemento preliminar al desarrollo de normativa sobre las interacciones en ambientes digitales, por lo que resulta muy relevante que se encuentren representadas en esta la mayor cantidad de

situaciones posibles.

Teniendo en cuenta el carácter de sugerencia de la Carta, consideramos que el alcance podría ser mayor en términos de establecer criterios aplicables a más vínculos o interacciones que se establecen en el marco de medios digitales. Ello no refiere a la incorporación de más derechos, sino de más criterios que asistan a la aplicación armónica de los mismos a más situaciones, especialmente en un contexto en el no se cuenta con regulaciones específicas o que concreten las situaciones más habituales.

Finalmente, consideramos que la Carta debería incidir en la colaboración público privada y en sistemas de prueba y error para contribuir al desarrollo y consolidación de estos derechos.

2. Sobre los derechos contenidos en la Carta

a) En relación a la identidad en el entorno digital

En este punto, sería interesante tratar la cuestión de la reputación como un bien y la portabilidad de la información que es generada en las plataformas por los usuarios.

Este es un tema que genera interés en la sociedad y agentes públicos interesados en la digitalización. Los sistemas de reputación son parte de los datos que componen esta información, contribuyen a la mejora operativa de los servicios a los que se accede a través de una plataforma y reducen la asimetría de información que puede afectar a un cliente.

Es importante considerar el derecho a disponer libremente de los datos que un usuario crea en una plataforma, para ser utilizada en otra, especialmente en relación a la información sobre su reputación. La portabilidad de ciertas métricas que un usuario genere implica cultivar una cultura de respeto hacia la identidad en el entorno digital, en la que una persona usuaria podrá aprovechar la información reputacional que haya generado en un espacio, en múltiples espacios tanto digitales como analógicos.

Sobre la portabilidad, la Carta incorpora este concepto en relación a la información generada por un paciente en relación a su derecho de la salud en el entorno digital y a la ciudadanía cuando interactúa con las administraciones públicas. Sin embargo, este concepto puede ser extrapolable a cualquier interacción digital que realice un usuario, en tanto la información que genere siempre tendrá valor, indistintamente de cuál sea esa información y con quien se realice la interacción.

b) Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital

En este punto, se sugiere incorporar la perspectiva de género como cuestión prioritaria, orientada no solamente a los procesos de transformación digital, sino como elemento transversal en la Carta. Ello a través del trabajo tanto en la esfera pública como también a través de la colaboración con agentes clave en el sector que puedan garantizar el acceso efectivo a los entornos digitales, y acortar las brechas. En este sentido, y como se apuntaba anteriormente, la colaboración público privada puede ser instrumento para innovar y

consolidar buenas prácticas y modelos de autorregulación para estos derechos.

c) En relación a los derechos digitales del entorno laboral y empresarial ·

Derechos en el ámbito laboral

Valoramos la presente iniciativa como un avance hacia principios jurídicos más acordes a los vínculos laborales a través de plataformas digitales, en tanto varias de las cuestiones incluidas resultan aplicables a los mismos.

En el actual contexto de discusión y desarrollo normativo sobre las especificidades de los derechos en entornos digitales, es importante proveer a las relaciones que se establezcan a través de plataformas con principios legales específicos que contengan una descripción - aunque sea mínima, dada la variedad de perfiles de colaboradores y modelos - de las condiciones de la prestación. Ello con el objetivo de facilitar la aplicación de la normativa laboral a estas realidades y para asegurar que las mismas se lleven a cabo en un contexto de seguridad y transparencia.

En ese sentido, podría considerarse la incorporación de elementos que aporten a la armonización de los criterios contenidos en la Carta para que estos resulten aplicables en la utilización de plataformas digitales de cualquier tipo, y para evitar la fragmentación que puede conllevar el desarrollo de normativas a nivel regional, como por ejemplo en aspectos como la preservación de la intimidad.

En este punto, podría extenderse lo establecido en relación a derechos en procesos de transformación digital a los ámbitos en los que no se cuenta con representación de los trabajadores o bien en el que los usuarios utilizan plataformas digitales con fines laborales, pero no son necesariamente parte de un colectivo de trabajadores. De esta forma, se hace extensiva la obligación de formación a más entornos digitales - tal como se entiende en la Carta - ampliando la protección a más tipos de interacciones de tipo laboral, que se dan a través de espacios digitales.

En relación al derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, el mínimo de información en relación a esta cuestión podría extenderse también a los cambios que puedan ocurrir en relación al funcionamiento del algoritmo utilizado, pero fundamentalmente consideramos que debe explicarse en lenguaje simple qué es un sistema de inteligencia artificial, además de los componentes que lo alimenten.

Más allá de que las decisiones automatizadas deban adecuarse a la legislación nacional, garantizando el respeto y compatibilidad con los derechos fundamentales, los algoritmos deben ser entendibles y previsibles para los usuarios y todos los actores implicados (sin menoscabar el I+D+i y know-how de las organizaciones que los utilizan).

· *La empresa en el entorno digital*

Insistimos en la relevancia del marco regulatorio de un territorio como determinante para su competitividad económica y atractivo inversor, promoviendo negocios innovadores innovadores, así como seguridad para los ciudadanos y empresas y empleo de calidad en el entorno. En el contexto de las tecnologías digitales este elemento es igualmente estratégico para incentivar la innovación a través de ayudas fiscales y financieras, establecer procedimientos administrativos eficaces y reducir la incertidumbre jurídica en nuevos proyectos.

Lograr un marco normativo en base a garantías y derechos para empresas, creadores e innovadores, sustentado en elementos como los anteriores genera ecosistemas que proyectan el atractivo de países, ciudades o regiones al exterior de forma diferencial. Es clave considerar que la innovación va a ir donde se pueda experimentar y se pueda prever un crecimiento de esta.

La innovación tecnológica y la regulación suelen moverse a velocidades diferentes. Con el objetivo de promover la innovación, y además de incentivar a los poderes públicos a actuar para desarrollar las condiciones necesarias, se propone crear espacios público-privados que permitan el diálogo y análisis para la mejor definición de planes de ordenación pública de las nuevas tecnologías y con el fin de seguir impulsando la creación de nuevos modelos productivos y fomentar el desarrollo de regulaciones avanzadas que puedan dar cabida a las nuevas realidades económicas. De esta forma, se conseguiría compaginar la innovación, la regulación necesaria y la protección al consumidor.

La operativa digital está en una constante renovación y mejora de sus operaciones, incorporando a su vez nuevas líneas de negocio con componente tecnológico. Así, un sistema de diálogo y de prueba y error controlado podría seguro contribuir a nuestras innovaciones. A su vez, el impulso de estos sistemas y sus dinámicas de diálogo entre actores públicos y compañías innovadoras representa un cambio cultural y de aprendizaje para la Administración, que puede contribuir a identificar tecnologías y metodologías útiles para el sector público.